Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 324,
noviembre de 2026, ISSN: 0251-3552, <nuso.org>.

Este número

América Latina es la región con mayor tasa de homicidios del mundo: con menos de 10% de la población mundial, concentra un tercio del total global. Por eso no sorprende que la «inseguridad» sea tan omnipresente en las preocupaciones sociales. Gran parte de ella se relaciona con el peso del crimen organizado, que captura instituciones, debilita la democracia y en muchos casos gobierna los territorios. Aunque a menudo la expresión «crimen organizado» remite a la imagen de un *narco*, con cadenas de oro y una vida llena de excentricidades, o de un cartel dedicado al tráfico de drogas, las actividades delictivas en la región están mucho más diversificadas.

Estamos en presencia de sociedades «rotas», en una región que además de ser la más violenta es la más desigual. Frente a Estados incapaces de extender los servicios públicos en todo el territorio nacional, emerge el «clientelismo criminal»; ante la precariedad y el desempleo juvenil, las organizaciones delictivas se vuelven una alternativa laboral; en contextos de pérdida de lazos comunitarios, ofrecen en ocasiones una forma de pertenencia.

Pero la etiqueta «crimen organizado» funciona a menudo como una suerte de cajón de sastre, donde entran demasiadas cosas. Esta imprecisión, por un lado, dificulta las políticas públicas para enfrentarlo y, por el otro, permite justificar violaciones de derechos humanos, gobiernos de excepción y giros autoritarios para satisfacer la demanda ciudadana de seguridad. Incluso puede servir para legitimar discursos xenófobos que culpan a los inmigrantes, como chivos expiatorios, por

la inseguridad y la violencia. El caso salvadoreño es tan extremo como instructivo: la sociedad, ahogada por el predominio de las pandillas, le dio un cheque en blanco a Nayib Bukele para pacificar el país, aunque el «costo» sea violaciones masivas a los derechos y un régimen cada vez más dictatorial. Una categoría que lo abarca todo permite justificar casi cualquier respuesta, y la que se ha impuesto en buena parte de la región es conocida: militarización, encarcelamiento masivo, suspensión de garantías. El crimen organizado cambió profundamente en las últimas dos décadas; el sentido común con que se lo enfrenta, bastante menos.

La imagen clásica –el cartel piramidal, el capo con nombre propio, la cocaína como mercancía casi exclusiva– no se ha extinguido, pero es muy imprecisa e incluso puede resultar engañosa. Las organizaciones delictivas diversificaron su cartera: extorsión, minería ilegal, tráfico de personas, control de mercados cotidianos, lavado de dinero por medio de circuitos comerciales «legales». Tampoco funciona bien la correlación entre desinstitucionalización y crimen organizado: en países con instituciones sólidas, como Chile, Uruguay o Costa Rica, su crecimiento tiñe las disputas electorales y genera inquietud social.

El crimen organizado no es solo un poder externo que desafía al Estado desde los márgenes: en muchos territorios convive con él, negocia con sus agentes y regula la vida cotidiana allí donde la autoridad pública se retira o se vuelve cómplice. La frontera entre lo legal y lo ilegal es con frecuencia muy porosa. Seguir el dinero y desmontar las protecciones políticas conduce, tarde o temprano, hacia actores de la economía legal y de las elites políticas y económicas, y es allí donde muchas agendas de seguridad pierden intensidad. La «mano dura» ofrece imágenes y réditos electorales inmediatos; la investigación patrimonial es lenta y políticamente costosa.

El progresismo encuentra en este terreno una dificultad particular. Suele ser percibido como demasiado «buenista». Los discursos de «mano dura» funcionan –más allá de sus resultados– como una suerte de desahogo: si nadie va a resolver el problema, para muchos es preferible un político que llame a «meterles bala» a los delincuentes a otro que busque dar cuenta de todas las «complejidades» del problema. La *bukelización* de los discursos securitarios apunta en este sentido, aunque las políticas de encarcelamiento masivo del mandatario salvadoreño –publicitadas con un potente y distópico marketing de la crueldad– son de dudosa eficacia para enfrentar a grupos criminales que están lejos de los miembros tatuados de las pandillas.

En tiempos en que el miedo se ha convertido en uno de los principales combustibles de las nuevas derechas, reflexionar sobre el crimen organizado resulta fundamental para afrontar la actual coyuntura política. Este número de NUEVA SOCIEDAD se propone contribuir a esta discusión.